

---

This is the **published version** of the bachelor thesis:

Acedo Jiménez, Irene Constanza; Butterfield, Eamon, dir. La documentación en la traducción jurídica : sistema español versus 'common law'. 2015. (1202 Grau en Traducció i Interpretació)

---

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/147011>

under the terms of the  **CC BY-NC-ND** license

# **LA DOCUMENTACIÓN EN LA TRADUCCIÓN JURÍDICA: SISTEMA ESPAÑOL VERSUS *COMMON LAW***

---

103698 - Treball de Fi de Grau

**Grado en Traducción e Interpretación  
Curso académico 2014-2015**

**Estudiante:** Irene Constanza Acedo Jiménez

**Tutor:** Eamon Butterfield

10 de junio de 2015

Facultad de Traducción e Interpretación

Universitat Autònoma de Barcelona

---

#### Datos del TFG

**Título:** *La documentación en la traducción jurídica: sistema español versus Common Law*  
**Autora:** Irene Constanza Acedo Jiménez  
**Tutor:** Eamon Butterfield  
**Centro:** Facultad de Traducción e Interpretación  
**Estudios:** Grado en Traducción e Interpretación  
**Curso académico:** 2014-2015

#### Palabras clave

Sistema judicial, Common Law, derecho anglosajón, derecho romano-germánico, traducción jurídica, derecho penal, *English criminal law*, poder judicial, *law report*.

#### Resumen del TFG

Trabajo centrado en la comparativa de los sistemas judiciales inglés y español, basados respectivamente en la *Common Law* o derecho anglosajón y en el derecho romano-germánico, como fuente de documentación para la traducción jurídica. Analiza la estructura de dichos sistemas judiciales poniendo especial énfasis en lo Penal. Además, se analizan datos de relevancia sobre la jurisdicción de ambos sistemas (los aforados, la Reina de Inglaterra...) y, a su vez, los agentes que intervienen en ellos (abogados, jueces...) por tal de probar la importancia del saber previo a la traducción. Incluye la traducción de un *law report*, es decir, el informe de un abogado, sobre un recurso de apelación y un glosario de términos jurídicos.

#### Aviso legal

© Irene Constanza Acedo Jiménez, Barcelona, 2015. Todos los derechos reservados. Ningún contenido de este trabajo puede ser objeto de reproducción, comunicación pública, difusión y/o transformación, de forma parcial o total, sin el permiso o la autorización de su autor/a.

#### Legal notice

© Irene Constanza Acedo Jiménez, Barcelona, 2015. All rights reserved. None of the content of this academic work may be reproduced, distributed, broadcast and/or transformed, either in whole or in part, without the express permission or authorization of the author.

---

## Índice

❖ Introducción.....	4
❖ El sistema judicial español .....	5
➤ Orden civil .....	5
➤ Orden penal.....	5
➤ Orden contencioso-administrativo .....	5
➤ Orden social .....	6
➤ Los aforados .....	9
➤ El indulto .....	9
❖ El sistema judicial inglés .....	10
➤ La reina de Inglaterra .....	11
❖ Agentes de los sistemas.....	12
❖ Conclusiones de la comparativa .....	16
❖ Texto para la traducción: <i>a law report</i> .....	16
➤ Análisis del texto .....	17
➤ Traducción.....	17
➤ Términos problemáticos del texto .....	19
❖ Glosario.....	21
❖ Conclusiones .....	27
❖ Bibliografía y webgrafía .....	28
❖ Anexos .....	29
➤ Original del texto traducido .....	29

## Introducción

Para ser un buen traductor no sólo es necesario conocer del todo una lengua, es imprescindible conocer a sus hablantes, su cultura, sus costumbres y lo que les rodea. Ésta ha sido principalmente mi máxima a lo largo de los años en los que he estudiado la carrera de Traducción. Sin conocer el contexto cultural es imposible realizar una buena traducción, sea dentro del ámbito que sea. Por esa precisa razón me he propuesto realizar un trabajo que abarque cuestiones relacionadas con la traducción jurídica ya que es la rama que quiero convertir en mi profesión. No sólo quiero, sin embargo, aprender vocabulario: mi objetivo va más allá. Quiero comprender y analizar ciertos sistemas judiciales ya que son un ámbito con el que tendré que familiarizarme y tratar a menudo.

Este trabajo pretende centrarse en dos sistemas judiciales muy cercanos pero que, a la vez, están muy separados en cuanto a sus procedimientos e instituciones: el español y el inglés. El primero, que conozco relativamente al ser española, me resulta muy interesante al encontrarse muy ramificado y disponer de multitud de órganos encargados de realizar tareas muy concretas. Por otra parte, el sistema inglés me es prácticamente desconocido, así que quiero estudiarlo a través de este trabajo.

A pesar de todo, será un estudio en su mayoría superficial ya que pretendo centrarme en lo que se conoce en español como el “orden penal”, cuyas características describiré y compararé por tal de dilucidar los pasos que se siguen para juzgar un caso que corresponda a dicha jurisdicción. Dado lo amplio del tema, he decidido escoger una de las jurisdicciones más amplia y que me resulta más atractiva.

Además de dicha comparativa y aprovechando el vocabulario que adquiriré gracias al trabajo de investigación, realizaré una traducción de un *law report* del inglés al español además de un glosario de términos relacionados con el entorno legal aprendidos gracias al proceso.

## El sistema judicial español

El artículo 117 de la Constitución española cita que “la justicia emana del Pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial”. Ello significa que el pueblo español tiene derecho a reclamar justicia, que será impartida por los miembros del poder judicial, uno de los tres poderes independientes que forman el sistema de estado. Dichos miembros, sin embargo, se estructuran de forma organizada y según las funciones que realizan y sus competencias, que dependen de parámetros como el tipo de delito o falta, el ámbito en el que se cometieron, su autor o su víctima. Estas características definen el orden jurisdiccional que se aplica al caso y, por tanto, el lugar donde se juzgan ya que existen numerosos peldaños dentro del Poder Judicial.

Existe en España la llamada “Ley Orgánica del Poder Judicial” (LOPJ), que regula las competencias de dichos juzgados y órganos. Define, asimismo, los órdenes en los que se divide la jurisdicción española, que son cuatro y coinciden con las salas en las que se divide el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial, junto con la Sala de lo militar (que regula la jurisdicción militar, que es una excepción). Según esta ley, los órdenes son los siguientes:

### Orden civil

También llamado “ordinario” o “común”, se encarga de todos aquellos litigios que no se incluyan expresamente en cualquiera de los otros órdenes, es decir, que se relacione con intereses privados y derechos subjetivos. Es, por tanto, un orden privado. Cabe distinguir entre delito civil y delito penal. Un acto constituye un delito civil si parte de una conducta ilícita con la intención de dañar a alguien. Por otra parte, existe el “cuasidelito civil”, todo aquel acto negligente que causa un daño. Sin embargo, si el delito civil en cuestión está tipificado en el Código Penal, puede ser considerado un delito penal y, en ese caso, cambiar de jurisdicción.

### Orden penal

Este orden conoce de las causas y los juicios criminales. El Código Penal tipifica toda conducta que se castiga a través de esta jurisdicción, ya sean delitos o faltas. Establece, además, los años con los que se castigan dichos actos. Esta jurisdicción incluye, además, algunas ramificaciones como los juzgados de menores que, a pesar de estar dentro de lo penal, tienen sus propios juzgados. A diferencia del civil, éste es un orden público.

### Orden contencioso-administrativo

Esta jurisdicción se caracteriza por controlar la legalidad de toda actuación por parte de la Administración Pública, es decir, la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas además de las entidades de la administración local y las de derecho público que de ellas dependen. Abarca, pues, los actos sobre personal, administración y patrimonio procedentes del Congreso de los Diputados, del Senado, de los Tribunales Constitucional y de Cuentas y del Defensor del Pueblo (y sus equivalentes autonómicos). Controla también la Administración Electoral y todos los actos del gobierno (del país y de las comunidades autónomas) relacionados con Derechos Fundamentales, contratos del sector público, responsabilidad patrimonial y otros ámbitos estrechamente relacionados con el sector público. Sin embargo, no conocerá de asuntos que la ley atribuya expresamente a otra jurisdicción, sea quien sea su autor.

## Orden social

Relacionada con la rama social del Derecho, se centra en los conflictos entre empresario y trabajador ya sea a nivel individual como colectivo. Abarca litigios relacionados con la negociación colectiva así como problemas en la contratación o, incluso, reclamaciones contra la Seguridad Social en materia de legislación laboral.

La excepción a dichas ramas la constituye la **jurisdicción militar**. Sus competencias se extienden única y exclusivamente en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo para garantizar que, en el juicio del litigio, se comprenda el ambiente en el que se cometió el delito y, por tanto, se juzgue en consecuencia. Comprende sólo el ámbito castrense (ya sea en territorio nacional o respecto a las tropas desplazadas fuera de sus fronteras) y conoce de las conductas tipificadas como delito en el Código Penal Militar.

Así pues, en el momento en que se comete un delito o falta, comienza un proceso de juicio según una u otra jurisdicción. Por ser la más común y, además, la más amplia, este trabajo se centrará en la orden penal, que abarca muchos tipos de delitos. Los juicios penales se celebran en distintos juzgados según el tipo de delito que se trate, lo que se reclama o el ámbito que abarca, que empieza dentro de la propia comunidad autónoma.

En primer lugar, los juzgados de paz son los encargados de actuar en caso de conciliaciones en materia exclusivamente civil. Se encuentran en localidades que no tienen juzgados de primera instancia o instrucción y resuelven, además, juicios civiles por reclamaciones de hasta 90€ o algunos juicios de faltas. Los jueces de paz se escogen democráticamente por el Ayuntamiento en cuestión cada cuatro años y no tienen por qué ser licenciados en Derecho aunque sí deben cumplir una serie de requisitos (ser español, mayor de edad y no tener ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad para desempeñar funciones judiciales).

Otra instancia a mencionar son los juzgados de instrucción. Además de juzgar las infracciones leves y las faltas dentro del ámbito familiar, se encargan de la investigación de delitos. Así pues, investigan lo ocurrido y pueden, si fuera necesario, ordenar la prisión provisional de los presuntos culpables.

Si el delito penal es algo más grave, el juzgado de paz pierde sus competencias a favor de los llamados “juzgados de lo penal” que, sin embargo, tampoco pueden juzgar todo tipo de delitos. Celebrando un juicio oral, abarcan delitos de gravedad relativamente baja, es decir, aquellos cuya pena de privación de libertad es igual o inferior a cinco años de prisión. Sin embargo, si la edad de autor de dicho delito está comprendida entre los 14 y los 18 años, la competencia de juzgarlo estará en manos de los juzgados de menores. En caso que el autor fuera menor de 14 años, pasaría a manos de las instituciones autonómicas de protección de menores.

Otro tipo de juzgado relacionado con lo penal es el juzgado de vigilancia penitenciaria. Sus funciones se centran en la ejecución de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Además, regula la potestad de las autoridades disciplinarias y garantiza el cumplimiento de los derechos y beneficios de los internos, así como de ofrecerles la posibilidad de presentar recursos contra las resoluciones de dichas autoridades.

Cuando el delito supera los cinco años de condena de privación de libertad corresponde a la Audiencia Provincial su juicio aunque también tiene competencias en lo civil. En materia penal, juzga en primera y única instancia los delitos castigados con penas superiores a cinco años de prisión. Mientras que los juzgados de lo penal se encuentran en distintos puntos dentro de la comunidad autónoma, la Audiencia Provincial tiene su sede en la capital de provincia. Además de encargarse de los delitos de mayor gravedad, se encargan de los recursos de apelación presentados en contra de las sentencias y resoluciones dictadas por los juzgados de lo penal, los juzgados de menores y los juzgados de instrucción de toda la provincia. Constituye, pues, una segunda instancia de las sentencias en materia tanto civil como penal.

Dentro de la comunidad autónoma propiamente dicha existe aún un último peldaño que culmina la organización judicial. Los tribunales superiores de justicia son el último órgano dentro de la propia comunidad autónoma con jurisdicción en todas las órdenes, además de ciertas competencias recogidas en los Estatutos de Autonomía.

Cuando se considera que un delito sobrepasa el ámbito de la comunidad autónoma, la Audiencia Nacional es el órgano encargado de instruirlo y juzgarlo. Su Sala de Lo Penal es la instancia que juzga los delitos más graves, como el terrorismo. Antes del juicio, es competencia de los juzgados centrales de instrucción llevar a cabo la investigación de los casos. Pueden incluso dictar prisión provisional mediante una audiencia con el imputado, el fiscal y las acusaciones particulares hasta la posterior celebración del juicio definitivo. Si la pena no llega a los cinco años, aunque sea competencia de la Audiencia el caso será competencia de los juzgados centrales de lo penal.

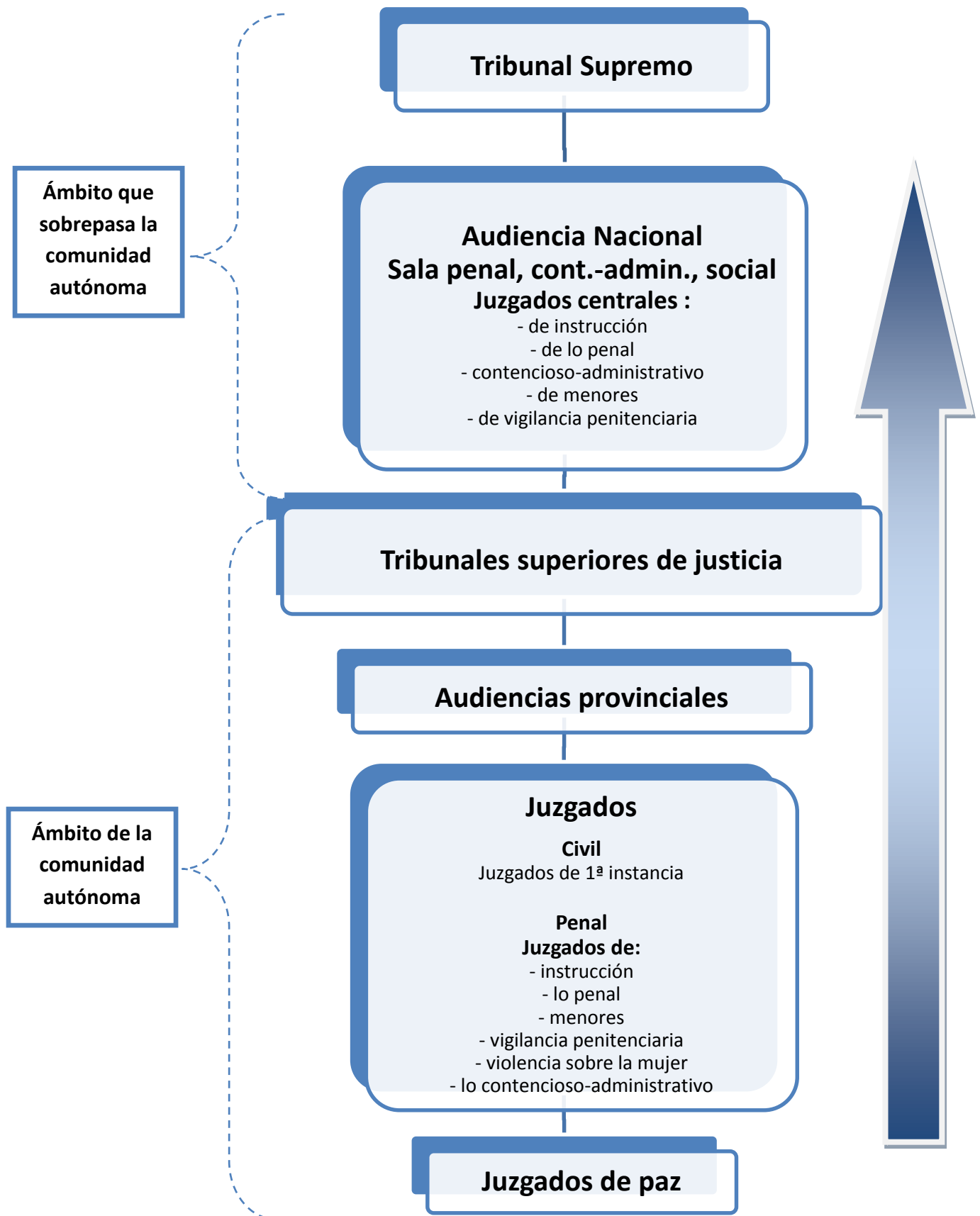
El último escalón de la justicia española es el Tribunal Supremo, con sede en Madrid. Constituye el máximo órgano en todos los órdenes y se encarga de recursos extraordinarios, de casación o revisión. Sus sentencias son definitivas y sientan jurisprudencia, es decir, constituyen un marco de referencia para el juicio de otros delitos.

La única excepción a las competencias del Supremo son las garantías constitucionales. Existe un tribunal aparte del sistema, el Constitucional, que se encarga de revisar los recursos de amparo, de inconstitucionalidad y otras cuestiones que se relacionen con la constitucionalidad, como por ejemplo los conflictos entre órganos del estado, tratados internacionales o algunas decisiones de las comunidades autónomas (que puede, incluso, impugnar).

El hecho de que existan tantos tramos en la justicia española implica que hay escalones a los que un ciudadano puede recurrir si no está de acuerdo con el veredicto emitido en primera instancia aunque siempre con el máximo de dos instancias fijado por la justicia española. Si un juzgado de lo penal dicta, por ejemplo, una pena superior a dos años de cárcel, el imputado puede llegar a reducir la pena hasta no tener que ingresar en prisión (las leyes españolas garantizan que una persona sin antecedentes previos puede evitar ir a la cárcel siempre y cuando la pena sea inferior a dos años). Mediante un recurso de apelación al mismo juzgado que emitió la sentencia, el caso se derivaría a la Audiencia Provincial, que estimaría si el recurso se admite o no.



En el siguiente gráfico se muestran los tipos de juzgados de forma jerárquica.



## Los aforados

Existe en España una condición especial que afecta al modo en que se juzga a los ciudadanos: el aforamiento. La Constitución de 1978 contempló en su texto una condición jurídica especial que garantizaba que ciertos miembros de los poderes ejecutivo y legislativo fueran juzgados por tribunales distintos a los que juzgan a ciudadanos de a pie. De este modo quedaba asegurado que dichos miembros no quedarían sujetos a posibles presiones políticas ya que se entiende que un tribunal superior es más independiente a dichas presiones. Así, el aforo quedaba restringido al presidente del Gobierno, a los ministros, a los diputados y a los senadores, que en caso de cometer un delito serían juzgados directamente por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó a jueces y fiscales, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, al Consejo de Estado de España y al Defensor del Pueblo junto con sus dos adjuntos. Por otra parte, los Estatutos de Autonomía incluyen como aforados a los miembros de los parlamentos y gobiernos autonómicos junto con sus defensores del pueblo, que serían juzgados por los Tribunales Superiores de Justicia. En total, el número de aforados en España supera las 15.000 personas, dato que contrasta con otros países como Reino Unido y Estados Unidos, donde esa figura no existe, o Italia y Alemania, donde sólo el presidente es aforado. Además, son aforados también jueces, fiscales y magistrados.

Además de los miembros de los tres poderes de España, existe un caso especial de aforamiento en la familia del Rey. Según la Constitución, el Rey es una figura que no puede ser juzgada por ningún tribunal. Tras la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014, se produjo en España una situación imprevista e inédita en el período de democracia: convivencia del antiguo y el nuevo Rey. Ello obligó a cambiar las leyes para convertir a Juan Carlos I y a su esposa Sofía en aforados. Asimismo, la reina Letizia y la princesa de Asturias, doña Leonor, pasaron a ser aforadas.

El hecho de que sólo los tribunales de competencias más elevadas puedan juzgar a un ciudadano supone una serie de ventajas y desventajas. Por una parte, a dichos tribunales se le presupone sentencias justas independientemente del cargo o función que desempeñe el imputado, por tanto se supone que gozan de más imparcialidad. Sin embargo, al ser juzgados ya por las máximas instancias, los aforados no gozan de las mismas posibilidades de apelación que el resto de ciudadanos.

## El indulto

Otra de las cuestiones importantes dentro del sistema judicial español es el indulto, una medida de gracia excepcional. Se concede a los reos de toda clase de delitos y consiste en la remisión (total o parcial) de la pena de los condenados por sentencia firme siempre y cuando no cause perjuicio a una tercera persona y tras escuchar a la parte ofendida. Así pues, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Rey otorga dicho beneficio remitiendo todas las penas o parte de ellas a las que se ha condenado al imputado aunque no los antecedentes penales siempre y cuando no sea un reincidente. Para conceder un indulto son necesarios informes positivos sobre dicho reo, aunque el ministro de justicia no tiene por qué justificar la decisión final. Así pues, el indulto es la única forma de eximir a un reo de su responsabilidad penal, pero no civil.

## El sistema judicial inglés

La principal diferencia del derecho anglosajón (al que pertenece el sistema inglés) con el romano-germánico (al que pertenece el español) es la aplicación del sistema. El derecho anglosajón, llamado también *Common Law*, se basa en la jurisprudencia sentada por otros jueces. Su sistema se basa principalmente en el análisis de sentencias judiciales que ha dictado el mismo tribunal o alguno superior (a los que, como en el sistema español, se puede apelar la sentencia dictada por dicho tribunal). Así pues, el derecho no se basa tanto en las leyes como en la interpretación que se da de ellas en un tribunal, cosa que puede llegar a generar ambigüedad. Cada juez debe realizar una interpretación del caso y valorar las semejanzas y diferencias con otro para dictar la sentencia final.

En el Reino Unido existen tres sistemas legales: el de Inglaterra y Gales (común), el de Escocia y el de Irlanda del Norte. Todos tienen su base en el sistema anglosajón. Sin embargo, en este trabajo se estudiará en profundidad el sistema inglés y galés y, en concreto, su vertiente penal ya que, como sucede en España, existe una división entre los órdenes de la ley. Lo penal (*criminal law*), lo civil (*civil law*) y lo administrativo (*administrative law*).

La administración de la justicia del sistema inglés está en manos, así pues, del Poder Judicial del Estado (*the Judiciary*). Sin embargo, se diferencia del sistema español ya que, mientras que en España el poder judicial es independiente de la figura del rey, en el sistema inglés el poder judicial nace de la prerrogativa real, de ahí que los tribunales reciban también el nombre de *The Queen's Courts* y los jueces, *Her Majesty's judges*. En cuanto a los tribunales, existen dos tipos de tribunales de justicia inferiores, de primera instancia, y dos superiores. Los tribunales inferiores son los Tribunales de Magistrados (*Magistrates' Courts*) y los Tribunales de Condado o Provinciales (*County Courts*). Los superiores son el Tribunal de la Corona (*The Crown Court*) y el Tribunal Superior de Justicia (*The High Court of Justice*). Por encima de ambos está el Tribunal de Apelación (*The Court of Appeal*) y, en última instancia, el Tribunal Supremo de Reino Unido (*Supreme Court of the United Kingdom*).

Los Tribunales de Magistrados se encargan, dentro de la jurisdicción penal, de las faltas y de los delitos menos graves. Sin embargo, son también la primera instancia de todos los delitos, así que su responsabilidad reside en decidir si les competen a ellos o al Tribunal de la Corona, que sería la segunda instancia. En estos tribunales se juzgan, además, los delitos cometidos por jóvenes de entre 10 y 18 años, actuando de Tribunales de Menores. Asimismo, estos tribunales entienden también de cuestiones civiles o administrativas, como las relacionadas con la salud pública, el código de circulación o las adopciones.

Los otros tribunales de primera instancia son los Tribunales de Condado. Ellos se encargan de procesos meramente civiles como incumplimientos de contratos, demandas por daños y perjuicios, quiebras o demandas de divorcio. Sin embargo, depende de la cuantía y la naturaleza de la demanda: como sucede en el sistema español, lo que se reclama en la demanda decide en qué tribunal se juzga.

Los siguientes tribunales, los superiores, son tres. El primero, el Tribunal de la Corona, entiende de lo penal principalmente. No es nunca de primera instancia (salvo con excepciones raras, como la estafa), es un tribunal de apelación de las sentencias de los Tribunales de los Magistrados, que sólo pueden recurrirse por la defensa. Sus sentencias se recurren ante la

Sección Penal del Tribunal de Apelación o, según el caso, ante el Tribunal Supremo de Reino Unido.

El Tribunal Superior de Justicia se encarga mayoritariamente de lo civil (pero también tiene competencias penales), aunque sí puede ser de primera instancia igual que los Tribunales del Condado, dependiendo de la cuantía reclamada en la demanda. Tiene tres salas (divisiones), llamadas *The Queen's Bench Division*, *The Chancery Division* y *The Family Division*. La primera es la sala mayor de dicho tribunal y entiende de cualquier demanda. Por otro lado, la segunda entiende de pleitos más específicos siempre dentro de lo civil (quiebras, hipotecas, escrituras, patentes...). La última división del Tribunal Superior se encarga de cuestiones familiares, como adopciones, pleitos matrimoniales o tutelas.

Por encima de ellos se encuentra el Tribunal de Apelación con sus dos secciones, la civil y la penal. Los jueces de este tribunal son los *Lords Justices of Appeal*. Conoce de apelaciones contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, los de Condado y los de la Corona (las sentencias de este último van siempre a la sala de lo penal).

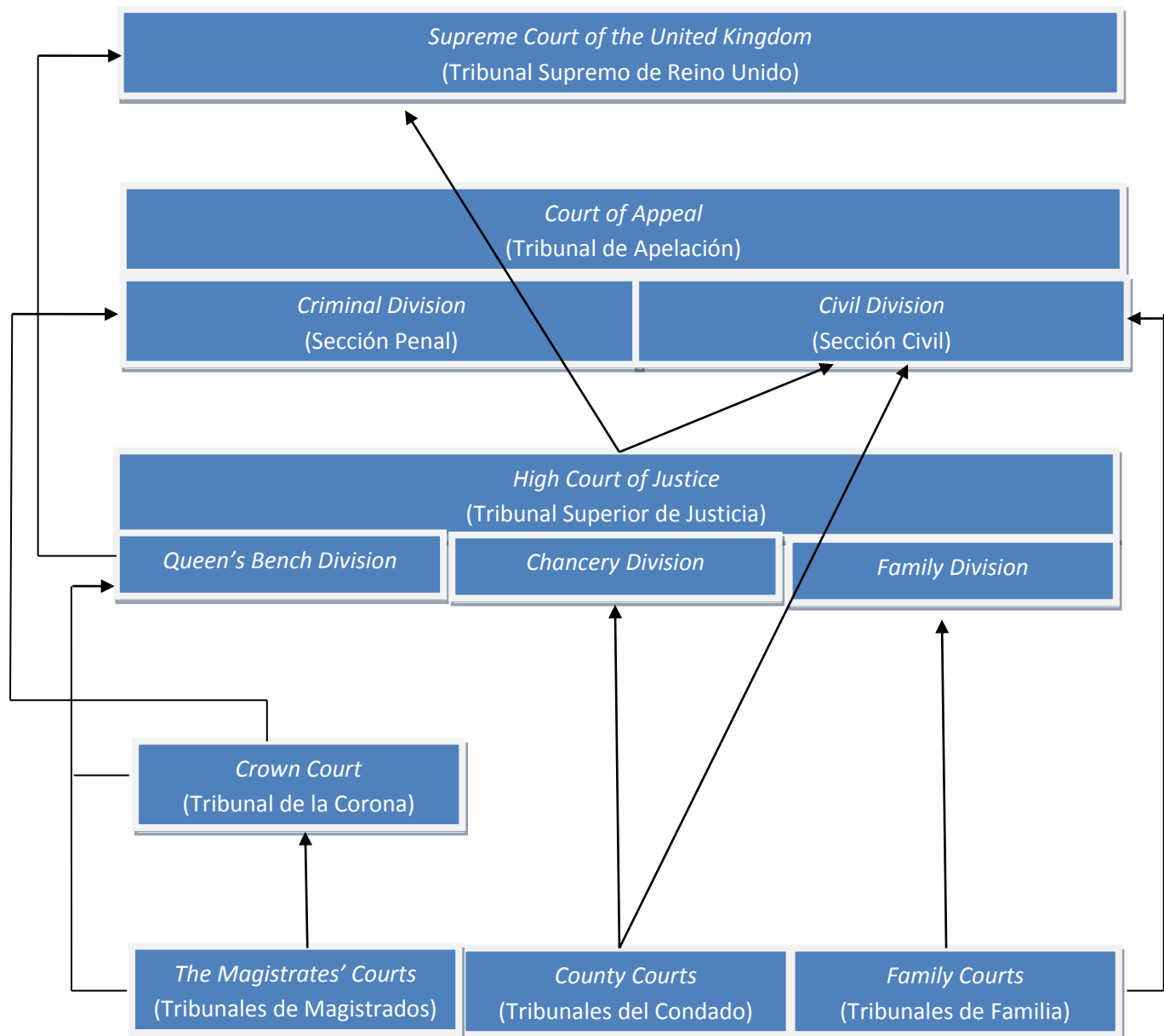
La última instancia de la justicia inglesa es el Tribunal Supremo del Reino Unido, el máximo tribunal de apelación con sede en Westminster, Londres. Es relativamente joven ya que fue establecido por el Acta de Reforma Constitucional de 2005 y es efectivo desde octubre de 2009. Hasta el momento, la Cámara de los Lores tenía, además de sus funciones legislativas, competencias judiciales. Tiene jurisdicción en todo el país, es decir, en los tres sistemas legales de Reino Unido. Dictan sentencia sobre delitos graves y conflictos de competencias entre los organismos del Reino. Esta corte está formada por 10 jueces electos más presidente y vicepresidente. Pueden ser depuestos por el Parlamento y están obligados a retirarse a los 70 si en 1995 ocupaban ya un cargo judicial o a los 75 si lo ocuparon más tarde.

### La reina de Inglaterra

Como en el caso del sistema español, hay distintos peldaños de apelación tanto en lo civil como en lo penal. El sistema inglés, sin embargo, tiene una diferencia vital: no existen los aforados. Así pues, todos los ciudadanos siguen el mismo proceso a excepción del monarca. La actual reina tiene inmunidad contra todo proceso civil o penal y no puede ser demandada ante los tribunales de justicia. A diferencia del caso de España, esta inmunidad o condición especial no se extiende a la familia real.

La reina, además, tiene el poder de conceder indultos. Es una Prerrogativa Real histórica que se puede otorgar a encarcelados o condenados a otras penas. Además, la gente que ha cometido delitos leves (con pena de menos de tres años de cárcel) pueden incluso librarse de la consignación del delito en los registros si no reinciden. Ésta es la condición principal del indulto de la reina, no reincidir en un período determinado de tiempo. Para sentencias sin pena de cárcel son 5 años, para penas de cárcel, el período es de 10 años. Sin embargo, para menores de 18 años el período es siempre de 5 años. La diferencia principal de este indulto con el español es que no se aplica a personas que trabajen con colectivos "vulnerables" (profesores, trabajadores sociales...) que siempre deben cumplir sus penas íntegras y que a los trabajadores vinculados al sistema judicial no se les permite librarse de la consignación del delito.

El siguiente gráfico muestra el sistema judicial inglés.



### Agentes de los sistemas

Parte imprescindible de ambos sistemas son las personas que en él se integran y cuya labor hace posible que funcionen. Siempre con el centro en lo penal, en este apartado analizaremos

los distintos actores de ambos sistemas y sus funciones para comprobar si son equivalentes o existen, como en la estructura general, diferencias sustanciales.

En el sistema español, cabe diferenciar entre el personal que está integrado en la oficina judicial (es decir, jueces y secretarios judiciales, el adscrito a la oficina judicial (es decir, aquellos cuyo trabajo depende directamente del poder judicial) y el externo (es decir, aquellos cuya labor se desempeña al margen del poder judicial, como los abogados siempre que no sean de oficio). En Reino Unido no existe el funcionariado del mismo modo que existe en España, así que muchos de los cargos españoles asociados al gobierno de forma directa en Inglaterra no lo están.

Sistema español	Sistema inglés
<p><b>Poder judicial</b></p> <p><b>Jueces y magistrados:</b> a ellos corresponde administrar la justicia y garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos. Su carrera comienza siendo jueces, después magistrados y, finalmente, magistrados del Tribunal Supremo (el último peldaño). Para ser juez, es necesario aprobar una oposición e ir ascendiendo, aunque los jueces del Tribunal Supremo son elegidos por el gobierno. El trato es de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Señoría: jueces</li> <li>• Señoría Ilustrísima: Magistrados y presidente de la Audiencia Provincial</li> <li>• Excelencia: Miembros del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.</li> </ul> <p><b>Jueces de paz:</b> ciudadanos no pertenecientes a la carrera judicial pero que son elegidos por el Ayuntamiento de municipios donde no hay juzgados de primera instancia y nombrados por el Tribunal Superior de Justicia.</p> <p><b>Jurado popular:</b> nueve ciudadanos que, mediante un sorteo efectuado en cada provincia, conforman un tribunal y emiten un veredicto sobre la culpabilidad del acusado, aunque la pena corresponde al juez. Sólo juzgan determinados delitos: asesinato, cohecho, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendio forestal, malversación de fondos públicos y dejar huir a un preso o ayudarle a hacerlo.</p> <p><b>Ministerio fiscal:</b> personal funcionario que se encarga de la acusación pública en los delitos</p>	<p><b>Jueces (<i>judges</i>):</b> su función es la misma que en España. Cabe diferenciar los tipos existentes según el juzgado en que desempeñen su función.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jueces del Supremo (<i>Justices of the Supreme Court or Law Lords</i>).</b> Su trato es de "<i>My Lord/Lady</i>". Para llegar a serlo, tienen que haber estado al menos dos años en el Tribunal Superior o de Apelación (o tener experiencia como <i>barrister</i> de al menos 15 años), ser propuestos para el cargo y elegidos por una comisión formada por jueces (con la aprobación del primer ministro y del Lord Canciller).</li> <li>• <b>Jueces del Tribunal Superior o de Apelación (<i>Judges of the High Court and Court of Appeal</i>):</b> su trato es de "<i>Your Lordship/ Ladyship</i>". Son nombrados por el Monarca a propuesta del Lord Canciller, procedentes de los Tribunales de Condado o <i>barristers</i> de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia.</li> <li>• <b>Jueces de los Tribunales de Condado (<i>Circuit Judges</i>):</b> su trato es de "<i>Your Honour</i>". Son nombrados por el Monarca a propuesta del Lord Canciller de entre <i>barristers</i> que cuenten con al menos siete años de experiencia.</li> <li>• <b>Jueces suplentes o a tiempo parcial (<i>recorders/part-time judges</i>):</b> <i>barristers</i> nombrados jueces a tiempo parcial al menos durante cuatro semanas al año.</li> </ul>

<p>y también en algunas faltas. Actúan de oficio o a petición de los interesados. Dentro de este personal está el Fiscal General del Estado, propuesto por el gobierno y nombrado por el rey.</p> <p><b><u>Personal integrante de la oficina judicial</u></b></p> <p><b>Secretarios judiciales:</b> funcionarios técnicos que dirigen la oficina judicial. Su función es ejercer la fe pública judicial y ordenar el consiguiente proceso. Así pues, se encargan del examen del trámite, de las actas, de las diligencias correspondientes, de recibir documentos de las partes y entregarlos al juez y demás tareas administrativas.</p> <p><b>Gestores, tramitadores y auxilios:</b> Se encargan de colaborar con el juez y el secretario durante las resoluciones.</p>	<p><b>Magistrates:</b> A pesar de la semejanza de la palabra, no significa “magistrado”, se acerca más al concepto del juez de paz. Son jueces legos en derecho (<i>lay judges</i>), que carecen de formación jurídica y que no cobran por sus servicios. Están en los Tribunales de Magistrados. Su trato es de “<i>Sir/Madam</i>” o “<i>Your Worship</i>”.</p> <p><b>Jurado (<i>jury</i>):</b> El jurado anglosajón o puro constituye en sí mismo un modelo de jurado seguido, aunque con alguna modificación, por países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Noruega o España. Está formado por 9 ciudadanos como mínimo y 12 como máximo escogidos del censo (menos en los Tribunales del Condado, que pueden ser 7 u 8). Existen los <i>criminal juries</i>, presentes en el Tribunal de la Corona, aunque también están en los Tribunales del Condado y en el Tribunal Superior. Deciden la culpabilidad o no del acusado, la pena corresponde al magistrado técnico.</p> <p><b>Fiscal (<i>prosecutor</i>):</b> Su función es la misma que en España. Existe la figura del <i>Director of Public Prosecution</i>, que es la máxima autoridad. Para serlo, tienen que ser <i>barristers</i> con mucha experiencia práctica.</p> <p><b>Clerk of the Court (secretario judicial) y County Clerk (secretario del condado):</b> su función es administrativa. Son Escribanos oficiales del juzgado, además de tomar juramentos.</p> <p><b>Law Clerk (o Judicial Assistant, asistente jurídico):</b> colabora con el juez a la hora de tomar una decisión, por ejemplo con la búsqueda de jurisprudencia.</p>
<p><b><u>Personal adscrito a la oficina judicial</u></b></p> <p><b>Médicos forenses:</b> médicos que prestan asistencia a jueces y fiscales. Sus funciones se centran en el análisis de lesiones de las partes y su estado físico y mental.</p> <p><b>Abogado de oficio:</b> a quien no pueda por falta de recursos o no quiera designar un letrado de su elección. Estos abogados no pueden negarse a defender a un individuo y</p>	<p><b>Registrar:</b> funcionarios judiciales nombrados por el Lord Canciller de entre <i>solicitors</i>. Velan por el cumplimiento de normas procesales y resuelven dudas sobre su cumplimiento. Pueden incluso juzgar demandas menores (con el acuerdo de las partes) o actuar de árbitros (<i>arbitrator</i>) si el juez resuelve que una demanda debe resolverse por arbitraje.</p> <p><b>Médicos forenses (<i>coroners</i>):</b> su función es la</p>



<p>dependen del gobierno.</p>	<p>misma que es España, pero en este caso son independientes del sistema judicial, les paga la autoridad local correspondiente.</p>
<p><b><u>Personal externo a la oficina judicial</u></b></p> <p><b>Abogados o letrados:</b> representan los intereses de su defendido ante un juzgado o tribunal además de asesorarlo en su defensa. Están obligados por el Colegio de Abogados a autorizar todas las peticiones durante el proceso y a realizar lo posible en la defensa de su cliente.</p> <p><b>Procuradores:</b> se encargan de la representación de sus poderdantes ante juzgados. Ejercen la dirección y la defensa de las partes ante el juez.</p> <p><b>Peritos:</b> especialistas encargados de valorar ante el juez hechos o circunstancias relevantes en un caso.</p> <p><b>Equipos técnicos:</b> equipos de profesionales (psicólogos, educadores y trabajadores sociales) que emiten informes sobre la situación y el entorno en que se halla un menor.</p> <p><b>Traductores e intérpretes:</b> traducen documentos redactados en otros idiomas para el juez o las partes y ejercen de intérpretes en juicios orales.</p> <p><b>Policía Judicial:</b> unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Autonómica y Guardia Civil) que ayudan al juzgado a resolver un delito.</p> <p><b>Defensores judiciales:</b> personas designadas por el juez para representar a un menor de edad o incapacitado en caso de conflicto entre éste y su representante legal.</p>	<p><b>Abogados:</b> según la experiencia, los estudios o los tribunales en los que pueden actuar, existen diferentes tipos de abogados en el sistema inglés, aunque el término <i>lawyer</i> los engloba a todos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Solicitor:</b> defienden los intereses de los ciudadanos en los tribunales más “bajos”, es decir, no pueden actuar en el Tribunal de Apelación, en el Superior o en el Supremo. Para serlo, además de tener estudios deben pasar un período como <i>Articled Clerks</i>, es decir, aprendices.</li> <li>• <b>Barrister:</b> abogados que acceden a los tribunales más altos. Muchas veces, son los <i>solicitors</i> quienes los contratan para que defiendan a un cliente cuyo caso ha cambiado de tribunal. Para serlo, se requieren estudios y pertenencia a las <i>Inns of Court</i>, asociaciones profesionales. También llamados <i>Counsels</i> dentro de su actuación en un caso. Ejercen también de lo que en España se conoce como procuradores.</li> <li>• <b>Public defender:</b> figura equivalente al abogado de oficio español. Los contrata la <i>Legal Aid Agency</i>, que depende del ministerio de justicia, para defender a quienes no tengan recursos.</li> </ul> <p><b>Consejeros de la Reina (<i>Queen’s Counsel, King’s Counsel</i> en caso de que haya un rey en Inglaterra).</b> Son juristas, nombrados por la Reina entre los <i>barristers</i> con más de 10 años de experiencia destacados por la excelencia en su campo y que obtienen dicho reconocimiento, que los hace prevalecer sobre el resto.</p> <p><b>Traductores e intérpretes (<i>translators and interpreters</i>):</b> tienen las mismas funciones que en España.</p>



## Conclusiones de la comparativa

Como conclusión a la comparativa, que constituye la primera parte de este trabajo, cabe destacar que los dos sistemas que aparecen en él son muy distintos. Mientras que el sistema español pertenece al romano-germánico, el inglés se basa en la *Common Law*. El sistema español, pues, permite a los jueces la interpretación de una ley fija, establecida, que permite a los abogados centrarse en ella para reinterpretarla según los intereses del defendido. El sistema inglés, al contrario, permite a los abogados una mayor flexibilidad a la hora de defender a un individuo ya que no necesariamente tiene que centrarse en una ley sino que puede acudir a jurisprudencia ya fijada y estudiar casos similares con sentencias favorables. Esto puede constituir una ventaja o una desventaja: el sistema español ofrece una mayor estabilidad, mientras que el inglés garantiza el aprendizaje basado en la experiencia. Cabe destacar la facilidad de reinterpretación de la ley que garantiza la *Common Law* ya que, al sentar jurisprudencia, abre un nuevo abanico de posibilidades automáticamente que en el sistema español sólo sería posible si se cambiaran las leyes. A pesar de que los jueces y abogados también se basan en la jurisprudencia, la palabra de la ley prevalece.

En cuanto al sistema en sí y sus agentes, no distan tanto en cuanto a tribunales, en ambos existen una serie de peldaños legales. Sin embargo, el sistema español (que depende sólo del ámbito geográfico y del tipo de delito) es más lineal que el inglés, que para derivar de un tribunal a otro se rige por una serie de parámetros. Es también digna de mención la importancia que dan ambos sistemas a la figura del Monarca y del gobierno (en el caso inglés, el Lord Canciller), aunque la figura de la Reina está más presente en el anglosajón.

Por último, sólo destacar que existen muchas más profesiones vinculadas a la justicia en España que en Inglaterra. Mientras que en España hay toda una serie de profesionales asociados directamente con el poder judicial (de los que, por ende, muchos son funcionarios estatales), en Inglaterra no existen muchas de esas ramificaciones. Sin embargo, los abogados en España obtienen su título y su licencia y ya pueden ejercer en todo tipo de tribunales mientras que el sistema inglés tiene más pasos intermedios. Dichos pasos constituyen un defecto del sistema, y es que provoca que el colectivo de jueces sea de avanzada edad. En España, cualquier persona con la carrera de Derecho y sus estudios como juez puede acceder a una oposición y, si la aprueba, convertirse en juez y, una vez dentro, ir escalando posiciones hasta el Supremo. En Inglaterra, los años entre cada peldaño son demasiados, cosa que hace que una persona relativamente joven no pueda, en ningún caso, acceder al puesto. Sin embargo, cabe destacar que el último peldaño en ambos casos (el Supremo) depende de la designación “a dedo” por parte de otros jueces o políticos.

## Texto para la traducción: *a law report*

El siguiente texto (extraído desde el ILCR, *The Incorporated Council of Law Reporting*) es un fragmento extraído de un *law report*, es decir, un informe que hace el abogado de un caso concreto. Sirven como referencia para otros casos similares, es decir, como cita de un abogado para defender su caso (hay que tener en cuenta que, en el sistema de *Common Law*, el juez toma la decisión final siempre en base a jurisprudencia ya sentada). Son especialmente frecuentes cuando un juez emite una sentencia “revolucionaria”, es decir, sienta jurisprudencia sobre una cuestión concreta. De ese modo, los abogados disponen de

material detallado sobre un caso concreto y las circunstancias que han llevado al juez a tomar una decisión determinada.

Decidí traducir un tipo de texto así porque incorpora mucho vocabulario relacionado no sólo con el sistema judicial (como los cargos), sino también con crímenes, con la forma de relatar un caso y con palabras y expresiones que podría oír en un juzgado.

### Análisis del texto

En primer lugar, se especifican las partes en el juicio (en este caso, Regina por un lado y, en el otro, Appleby, Bryan y Cowles). Después hay un código identificativo del caso y, antes del texto, se especifica el tribunal en que se emitió la sentencia (*CA, Court of Appeal*), los magistrados y la fecha. En el original, sigue un primer fragmento en que se detallan las razones de dicha apelación y el resultado del juicio en primera instancia. A partir de aquí, se explica la determinación del juez. En este caso, se justifica una condena mayor ya que el delito por el que se juzga a los acusados causó la muerte, así que el tribunal considera que debe dar mayor importancia al crimen. Así pues, este informe se redacta para justificar un incremento de la pena a los acusados exigida por el fiscal general y, además, desestima otras apelaciones. Es especialmente importante porque dicho aumento de condena se justifica basándose en un cambio de la estructura legislativa para imponer penas mayores a los crímenes que causen el fallecimiento de la víctima. Para terminar, se detallan los asistentes al juicio y firma la abogada que redacta el informe, Clare Barsby.

El público al que iría destinado este texto serían abogados, jueces y juristas españoles interesados en el por qué del cambio de penas ocurrido en el sistema inglés. Es un público, por tanto, con muchos conocimientos dentro del ámbito jurídico pero que no tiene por qué conocer las instituciones y sistemas ingleses.

Como textos paralelos en español, dado que no existen tales informes, tomo sentencias emitidas directamente por los tribunales. Exponen los hechos de forma parecida y hacen referencia a leyes del mismo modo que los *law reports* a casos citados, aunque el lenguaje de una sentencia es mucho más específico que el de un *report*, cosa que me permite más flexibilidad a la hora de traducir.

### Traducción

Regina contra Appleby

Regina contra Bryan y otro

Regina contra Cowles y otro

[2009] EWCA Crim 2693; [2009] WLR (D) 373

Tribunal de Apelación: Su Señoría, Juez Presidente; Thomas y Hughes, Jueces del Tribunal de Apelación; Simon y Royce, jueces. 18 de diciembre de 2009

Como resultado de cambios recientes en las estructuras legislativas, los autores de crímenes resultantes en muerte deben castigarse más severamente que antes ya que, a pesar de que se

trate de una condena por homicidio y no por asesinato, el tribunal debe centrarse más en el hecho de que ha fallecido una víctima como consecuencia de una agresión ilegítima.

El Tribunal de Apelación (Sección Penal), reunido para (i) conceder al fiscal general la licencia, según dicta la sección 36 de la Ley de Justicia Penal de 1988, para calificar como demasiado indulgente la sentencia impuesta el 3 de julio de 2009 en el Tribunal de la Corona de Teesside (con el juez Peter Fox como Consejero de la Reina) a Declan Paul Appleby, condenado por asesinato con el beneplácito de Su Majestad a prisión durante un mínimo especificado de seis años, e incrementar este período mínimo a 9 años; (ii) conceder al fiscal general la licencia, según dicta la sección 36 de la Ley de Justicia Penal de 1988, para calificar como demasiado indulgentes las sentencias impuestas el 3 de julio de 2009 en el Tribunal de la Corona de Mold (por el juez Davis) a Thomas Bryan por su declaración de culpabilidad de homicidio y a Peter Jason Roberts por homicidio de tres años y dieciocho meses de prisión respectivamente, e incrementar dichas penas a cinco años y tres años y medio de prisión respectivamente y (iii) desestimar los recursos de apelación de Ben Kevin Cowles y Tom Andrew Cowles contra las sentencias dictadas por el juez Saunders el 26 de junio de 2009 en el Tribunal de la Corona de Norwich de siete años y medio y siete años de prisión en total respectivamente por sus declaraciones de culpabilidad de delito de agresiones causando lesiones graves, alteración del orden público y homicidio.

El Juez Presidente declaró, en un primer análisis, que un agravante significativo de estos casos de homicidio fue que incluyeron violencia gratuita en las calles, sin razón de ser, disuadiendo a los ciudadanos respetuosos de la ley de caminar por la calle, especialmente de noche.

Estos casos dieron al tribunal la oportunidad de reconsiderar el enfoque de la sentencia en casos de homicidio en los que, a pesar de que el acusado no tenía intención de causar la muerte o lesiones graves, fue condenado por homicidio ya que la muerte había sido el resultado de una agresión ilegítima. Si el acusado había sido condenado por homicidio, las consecuencias debían considerarse accidentales e involuntarias. Es necesario abordar la cuestión del impacto de la legislación penal reciente. La sección 143(1) de la Ley de Justicia Penal de 2003 subraya la importancia de dictar una sentencia en función de las consecuencias del delito, cosa que supuso una nueva disposición legislativa que requería expresamente la especificación explícita en la sentencia del grado de culpabilidad del delincuente y las consecuencias de sus actos ya fueran reales o potenciales, deliberadas o previsibles. En el caso del homicidio, el grado de culpabilidad puede ser relativamente bajo, sin embargo el daño causado primó sobre todo lo demás. La repercusión de la Ley de Justicia Penal de 2003 fue el incremento del elemento punitivo en la sentencia por asesinato. Las pautas definitivas dadas por el *Sentencing Guideline Council*<sup>1</sup> no son análogas en los casos de homicidio por provocación y en los de homicidio en grado de tentativa, como tampoco lo fueron las consideraciones tomadas en el caso R. contra Wood (No 2) [2009] EWCA Crim 651; [2009] WLR(D) 125 en cuanto al homicidio con atenuante por alteración mental ni lo son en casos por fallecimientos en carretera. Sin embargo, tras valorar en general los recientes cambios en las estructuras legislativas, se llegó a la inevitable conclusión que los crímenes que causan la muerte deben ser castigados con más severidad, no hasta igualar las sentencias para homicidio

---

<sup>1</sup>N. del T.: Consejo creado en Reino Unido para dar pautas a los tribunales en cuanto a la imposición de penas.

causado por una agresión ilegítima con las sentencias sugeridas para el asesinato en el anexo 21 a la Ley de 2003, pero sí lo suficiente como para asegurar que el tribunal se centrará más en el hecho de que haya muerto una víctima como consecuencia de una agresión ilegítima incluso cuando se trate de una condena por homicidio, y de acuerdo con la intención legislativa, debe dársele un mayor peso.

Comparecencias: Timothy Roberts, Consejero de la Reina, y Robin Duffy (asignado por el Registrador de Apelaciones Penales) para Appleby; Duncan Bould (asignado por el Registrador de Apelaciones Penales) para Bryan; Jonathan Duffy (asignado por el Registrador de Apelaciones Penales) para Roberts; Andrew Edis, Consejero de la Reina (enviado por el Abogado del Tesoro) para el fiscal general; Graham Parkins, Consejero de la Reina (asignado por el Registrador de Apelaciones Penales) para Ben Cowles; Michael Hubbard, Consejero de la Reina (asignado por el Registrador de Apelaciones Penales) para Tom Cowles y Mark Dennis, Consejero de la Reina (enviado por el Servicio de Fiscales de la Corona) para la Corona.

Informe elaborado por Clare Barsby, abogada.

### Términos problemáticos del texto

Término original	Traducción	Comentarios
<i>Regina v Appleby [...]</i>	Regina contra Appleby [...]	En las sentencias españolas (lo más cercano en este sistema a los <i>law reports</i> ) se suele separar el nombre del acusado y el de las víctimas mientras que en el sistema inglés se usa el “versus”, que ya se ha asimilado en español como “contra”.
<i>CA, CJ, LJ, JJ</i>	Tribunal de Apelación, Juez Presidente, jueces del Tribunal de Apelación, jueces	Es frecuente el uso de estas abreviaturas en los <i>law reports</i> para presentar a los presentes en un determinado juicio y no alargar demasiado el texto.
<i>the conviction was for manslaughter rather than murder</i>	a pesar de que se trate de una condena por homicidio y no por asesinato	En la jurisdicción inglesa se separa el “manslaughter” del “murder”, siendo el primero menos grave ya que se considera involuntario de algún modo o incluye quitar la vida a una persona con algún atenuante (como no estar en plena posesión de las facultades mentales). En español, se usa el término “homicidio” (que puede ser involuntario, imprudente...), que se diferencia del asesinato (lo que sería el “murder”) por la carencia de ensañamiento, premeditación y alevosía. En este fragmento, empleo estas formas por ser las más similares para marcar la diferencia de la intención del acusado.
<i>Davis J</i>	por el juez Davis	J es la abreviatura empleada para la palabra “judge” (juez), que en este caso hace referencia al juez que dictó sentencia.
<i>LORD JUDGE CJ</i>	el juez presidente	Aunque es un concepto que no existe en español, en el sistema anglosajón se

		especifica el juez que preside determinados tribunales superiores con las siglas CJ (“chief judge”), así que existe un término acuñado.
<i>in the reserved judgement of the court</i>	en un primer análisis	Hace referencia a la “reserved decision” de un juez, es decir, la opinión que emite antes de la sentencia firme. No es definitivo, sino una observación del caso. Es un término que no existe en español.
<i>aggravating feature</i>	agravante	En español no es necesario poner “característica” como “feature” ya que se emplea el término “agravante”.
<i>manslaughter</i>	homicidio involuntario	En este fragmento, escojo “homicidio” porque más adelante se habla del homicidio culposo (es decir, el homicida no tenía intención de matar con sus actos).
<i>graveous bodily harm</i>	lesiones graves	El término en inglés hace referencia a un daño físico provocado intencionadamente.
<i>act of unlawful violence</i>	agresión ilegítima	Una agresión ilegítima es un ataque directo e injusto contra una persona o sus bienes, definición que se ajusta al término en inglés dentro del contexto.
<i>unintentional and unintended</i>	accidentales e involuntarias	En inglés es un doblete ya que ambas palabras tienen como significado la no intencionalidad del sujeto. Al traducirlo, sin embargo, he optado por mantenerlo separando accidental e involuntario para matizar el sentido de que pueden haber sido una consecuencia accidental de un acto o las consecuencias no voluntarias del mismo.
<i>Criminal Justice Act 2003</i>	Ley de Justicia Penal de 2003	Al ser un término propio de la jurisdicción inglesa, he optado por emplear el término acuñado y literal para que quede claro el significado.
<i>Sentencing Guideline Council</i>	<i>Sentencing Guideline Council</i>	Esta institución no tiene equivalente ni término acuñado en español, así que he optado por dejarla tal cual y añadir una nota a pie de página (N. del T.: consejo creado en Reino Unido para dar pautas a los tribunales en cuanto a la imposición de penas).
<i>attempted murder</i>	homicidio en grado de tentativa	En este caso, podría traducirse por tentativa de homicidio o asesinato, sin embargo escojo “homicidio” porque se compara su pena con la del homicidio en sí, ergo no sería coherente compararlo con un intento de asesinato que sí tiene intención.
<i>diminished responsibility manslaughter</i>	homicidio con atenuante por alteración mental	El término “diminished responsibility” hace referencia en la ley inglesa al hecho de que el acusado no se encontraba en plenas

		facultades mentales en el momento de consumir el asesinato, por lo tanto se considera “manslaughter”. En España existe la atenuante por alteración mental dentro del homicidio, cosa que rebaja la consideración del delito y la pena como ocurre en el caso inglés.
<b>Treasury solicitor</b>	Abogado del Tesoro	Hace referencia al “Treasury Solicitor’s Department”, un departamento del gobierno inglés que desde el 1 de abril de 2015 se llama “Government Legal Department” y que emplea a <i>barristers</i> y <i>solicitors</i> para asesorar en cuestiones legales al gobierno. Al no existir un equivalente en español, he optado por el calco del inglés.

## Glosario

Durante la investigación del presente trabajo he podido comprobar lo amplio y complicado que resulta el tema del vocabulario jurídico. Así pues, he realizado un glosario con palabras relacionadas con el tema y que he ido encontrando gracias a la lectura.

Español	English	Comments
<b>abogado</b>	lawyer(USA)/barrister (UK)	also: solicitor (UK). Según contexto <sup>2</sup>
<b>acreedor</b>	creditor	
<b>actuación</b>	intervention	
<b>acusación</b>	prosecution	Sólo como colectivo (el estado...)
<b>acusación particular</b>	(private) prosecutor	Como individuo
<b>acusado</b>	accused/ defendant	
<b>acusar</b>	to charge (legal)/ to accuse	
<b>acusarse</b>	to confess	
<b>administración pública</b>	public administration	
<b>adopción</b>	adoption	
<b>agotar el proceso</b>	to exhaust the process	
<b>aguas internacionales</b>	international waters	
<b>alegación</b>	declaration/ statement	
<b>alevosía</b>	premeditation/ malice aforethought	
<b>allanamiento de morada</b>	forced entry	
<b>amistosamente</b>	in a friendly way	
<b>antecedentes</b>	criminal record	
<b>antecedentes del caso</b>	case background	
<b>apelar</b>	to appeal	recurso de apelación: appeal
<b>apología del delito</b>	(US) defense/	

<sup>2</sup>Ver apartado “Agentes de los sistemas”.

	(UK)defence	
archivar un caso	file a case	nota: caso sin resolver
arrendador	landlord/lessor	arrendatario: render/tenant
arrendamiento	leasehold	
arrestar	to arrest/ to detain	
arresto	arrest	
arresto de fin de semana	weekendarrest	
arresto domiciliario	housearrest	
asesinato	murder	
atestiguar	to attest/to testify	
autoría de un delito	responsibility of a crime	
autoridad	authority	
ayuntamiento	council	
banquillo de los acusados	dock	
buro-fax	bureaux fax service	
cadáver	corpse	
cadena perpetua	life imprisonment	
caso	case	
cese	stoppage	
coartada	alibi	
código penal	Criminal Code	
cometer un crimen	to commit a crime	
condenado	convicted person	
condenar	to sentence	a muerte: to condemn
consistorio	consistory	
constar en acta	proceedings are mantained and recorded	
corredor de la muerte	death row	
crimen	felony	also: serious crime
crimen de Estado	State crime	
crimen organizado	organized crime	
crimen pasional	crime of passion	
criminal	criminal	adj. and noun
cuantía	amount involved	
cuerpo de seguridad	law enforcement	
cuerpo del delito	corpus delicti	
culpable	guilty	culpabilidad: guilt
daños y perjuicios	(for) the damages	
declarar	to declare	also: to find (only a judge)
declarar a favor	to declare in favor	
declarar bajo juramento	to declare under oath	
declarar en contra	to declare against	
declarar improcedente	to dismiss	
declararse (culpable/ no culpable)	to plead (guilty/ not guilty)	n: guilty plea/ confession
decreto	decree	V: to order

<b>defensa</b>	(US)defense/ (UK)defence	also: (UK) defense counsel/ attorney/ lawyer/ plaintiff's attorney; (US) plaintiff's counsel/ barrister
<b>defensor del pueblo</b>	ombudsman	
<b>delinquir</b>	to commit a small crime	
<b>delito</b>	crime/offence (UK)	also: summary offence (minor crime)
<b>delito común</b>	common crime/ common offense	
<b>demanda</b>	civil action	
<b>demanda de divorcio</b>	petition for divorce	
<b>demandado</b>	defendant	
<b>demandante</b>	complainant	
<b>denunciante</b>	complainant	
<b>denunciar</b>	to report/ to inform against/ to inform on	Noun: complaint/ report. NO CONFUNDIR: querella= complaint/ lawsuit
<b>derechos</b>	rights	
<b>desacato a la autoridad</b>	contempt of court	
<b>desahucio</b>	eviction	
<b>desestimar (un recurso)</b>	to dismiss	
<b>detener</b>	to arrest/to detain	n: arrest/detention
<b>deuda</b>	debt	deudor: debtor
<b>dictar (sentencia)</b>	to pass/ pronounce (sentence)	
<b>documento fehaciente</b>	certified document	
<b>dolo</b>	malice/mens rea	
<b>emprender acciones judiciales</b>	to initiate legal proceedings	
<b>encausar</b>	to bring charges against (oftenpassive)	encausamiento: prosecution
<b>escritura</b>	deed	
<b>estafa</b>	fraud	
<b>estatuto</b>	statute	
<b>estrado</b>	witness stand	
<b>expediente</b>	file/ record	
<b>falta</b>	minor offence(UK)/ misdemeanour (US)	
<b>fiscal</b>	district attorney (US)	also: (UK) public prosecutor
<b>fiscalía</b>	(US) district attorney's office/ (UK) public prosecutor's office	def: oficina del fiscal
<b>fiscalía</b>	(US) district attorney/ (UK) public prosecutor	def: oficio del fiscal
<b>Fuerzas de Seguridad</b>	security forces	
<b>homicidio</b>	homicide	also: manslaughter (siempre involuntario)
<b>hurto</b>	robbery/ theft	(cosa): stolen goods.
<b>ilegal</b>	illegal	
<b>imputar</b>	to accuse/to charge	



<b>incidencia</b>	incidence	
<b>inculpar</b>	to frame/to accuse/to charge	prnl: to incriminate oneself, to confess
<b>incumplimiento de contrato</b>	breach of contract	
<b>incurrir</b>	commit	
<b>indemnización</b>	compensation for...	
<b>informe</b>	report	
<b>infractor</b>	offender	
<b>inmunidad diplomática</b>	diplomatic immunity	def: no imputabilidad
<b>inmunidad judicial</b>	judicial immunity	
<b>inmunidad parlamentaria</b>	parliamentary immunity (UK)/ congressional privilege (US)	
<b>inocente</b>	innocent	
<b>inquilino</b>	tenant	
<b>inspección</b>	inspection	
<b>intento de asesinato</b>	attempted murder	
<b>interponer (una demanda)</b>	to sue	also: to take legal steps/ to start a lawsuit
<b>intromisión ilegítima</b>	unlawful interference	
<b>inviolabilidad</b>	inviolability	
<b>juez</b>	judge	su señoría: your honour <sup>3</sup> / / con la venia, señoría: may it please the court/ / also: Her Majesty's judge (UK)
<b>jurado</b>	jury	member: juror/ member of the jury
<b>jurar</b>	to swear	jurar bandera: to pledge allegiance to the flag
<b>juramento</b>	oath	v: to administer (tomar juramento) v: to swear an oath (prestart juramento)
<b>juzgado</b>	court	
<b>juzgado civil</b>	civil court	
<b>juzgar</b>	to try (someone) for (something)	
<b>juzgar un crimen</b>	to prosecute a crime	
<b>Ley de Arrendamientos Urbanos</b>	Law for Urban Rents	
<b>Ley de Propiedad Horizontal</b>	Horizontal Property Act	Según contexto, completar con adj. "Spanish"
<b>Ley Marcial</b>	MartialLaw	
<b>ley mercantil</b>	commercial law	
<b>mafia</b>	mafia/ crime syndicate	
<b>mayor de edad</b>	legal age/ adult	
<b>medidas cautelares</b>	precautionary measures	
<b>menor de edad</b>	minor/ underage person	
<b>molestar</b>	to bother	
<b>móvil</b>	motive	
<b>nocivo</b>	damaging	

<sup>3</sup> Ver apartado "Agentes de los sistemas"

<b>obligación</b>	duty/responsibility	
<b>orden civil</b>	civil law	
<b>orden penal</b>	criminal law	
<b>ordenanza municipal</b>	municipal bylaw	
<b>pena</b>	sentence/ punishment	
<b>pena de muerte</b>	death penalty/ capital punishment	
<b>persona jurídica</b>	legal person	also: legal entity
<b>perjudicado</b>	wronged	
<b>pleito matrimonial</b>	defended divorce	
<b>poder judicial del estado</b>	the judiciary	
<b>policía</b>	police	individuals: policeman/ policewoman
<b>poner en conocimiento</b>	to notify	
<b>poner una queja</b>	to lodge a complaint	
<b>por vía judicial</b>	through the courts	
<b>premeditado</b>	premeditated	
<b>preso/ recluso</b>	inmate	
<b>presunto</b>	suspected	
<b>prevaricar</b>	to shirk one's duty/to fail to act/to prevaricate	n: perversion of justice/ prevarication
<b>primera instancia</b>	first instance	
<b>prisión</b>	prison/ (US) penitentiary	
<b>procesar</b>	to prosecute	
<b>proceso judicial</b>	court proceedings	also: legal proceedings
<b>procurador</b>	attorney (US), lawyer (UK)	also: barrister (UK)
<b>prueba</b>	evidence	
<b>quiebra</b>	bankruptcies	
<b>receso</b>	recess	
<b>reclamar</b>	to complain about/ claim	
<b>reclamar daños y perjuicios</b>	to claim damages	
<b>recurso contencioso-administrativo</b>	administrative-contentious appeal	
<b>recurso de amparo</b>	application for amparo	
<b>regular</b>	to regulate	
<b>representar</b>	to represent	
<b>requerir</b>	to require	
<b>rescindir un contrato</b>	to rescind the contract	
<b>resistencia a la detención</b>	resisting arrest	
<b>responsabilidad civil</b>	civil liability	
<b>responsabilidad de una persona jurídica</b>	corporate liability	
<b>responsabilidad del empleador</b>	employer's liability	
<b>responsabilidad extracontractual</b>	tortuous liability	

<b>responsabilidad legal</b>	statutory liability	
<b>responsabilidad no culposa/objetiva</b>	strict liability	
<b>responsabilidad patrimonial</b>	pecuniary responsibility	
<b>responsabilidad solidaria</b>	Enterprise liability	
<b>robo</b>	robbery/ theft	(person): robber/ thief
<b>sección de lo civil</b>	civil division	
<b>sección de lo penal</b>	criminal division	
<b>secreto profesional</b>	professional secrecy	
<b>sentencia</b>	sentence	V: to sentence
<b>ser declarado culpable</b>	to be found guilty	
<b>sesión a puerta cerrada</b>	courts sit in camera/ chambers	also: courts of record
<b>sesión pública</b>	courts sit in public	
<b>so pena</b>	under penalty of	
<b>sobreseimiento</b>	dismissal	
<b>solicitud</b>	application	
<b>sospechoso</b>	suspected	
<b>supuesto delito</b>	alleged crime	
<b>tareas comunitarias</b>	community tasks	
<b>tentativa de homicidio/asesinato</b>	attempted murder	also: homicidio en grado de tentativa
<b>testamentaria</b>	probate	
<b>testamentaria contenciosa</b>	contentious probates	
<b>testificar</b>	to testify	
<b>testigo</b>	witness	llamar a declarar a un testigo: to call a witness
<b>testigo de cargo</b>	witness for the prosecution	
<b>testigo protegido</b>	protected witness	
<b>testimonio</b>	testimony	
<b>títulos de la propiedad</b>	ownership titles	
<b>trámite</b>	process/ stage	
<b>tribunal</b>	court of law	also: The Queen's Courts (UK)
<b>Tribunal de Apelación</b>	The Court of Appeal	also: appellate court (en caso de referirse a un tribunal de apelación, cualquiera de segunda instancia)
<b>Tribunal de la Corona</b>	The Crown Court	
<b>Tribunal de Patentes</b>	Patents Court	
<b>Tribunal de Sociedades Mercantiles</b>	Companies Court	
<b>Tribunal Superior de Justicia</b>	The High Court of Justice	
<b>Tribunales de Condado/ Provinciales</b>	County Courts	
<b>Tribunales de Magistrados</b>	Magistrates' Courts	
<b>tutela de menores</b>	wardship of minors	
<b>vía penal</b>	criminal procedure	

## Conclusiones

Tras realizar este trabajo y comprobar lo amplio que es el mundo de la terminología jurídica, he llegado a la conclusión de lo importante que es la documentación en este campo ya que el conocimiento del campo al que pertenece el texto que se analiza es vital a la hora de traducir.

Cuando me planteé el presente trabajo, decidí realizar un estudio relativamente amplio (aunque me haya centrado más en lo penal) del sistema judicial de dos sistemas muy diferentes precisamente para comparar lo alejados que están y cómo afecta este hecho al mundo de la traducción. No es una cuestión banal ya que, en el momento de buscar equivalencias, resulta complicado a veces hallar el término que mejor se ajuste a lo que se quiere expresar en español, en este caso. Algo tan simple como el término “abogado” puede generar confusión ya que en Inglaterra existen dos tipos de abogados según el tipo de tribunal, ergo un español que fuese, por ejemplo, juzgado en Londres podría no entender el cambio de personal que se desarrolla a su alrededor. Así pues, la mediación cultural del (en este caso) intérprete jugaría un papel muy importante para guiar al ciudadano extranjero, cosa que se adquiere gracias a investigaciones como la que yo he llevado a cabo.

Otra cuestión que ha surgido en el momento de realizar el trabajo ha sido la facilidad en el momento de traducir. Tras hacer la correspondiente investigación teórica pude comprobar que muchos de los conceptos que aparecían tanto en el texto que traduje como en los documentos que empleé para traducirlo me resultaban mucho más familiares, cosa que facilitó enormemente la tarea con cuestiones a veces tan simples como las siglas, que se emplean mucho en inglés. Si en un texto aparece de repente *CA*, a un traductor que conozca el sistema inglés le será más simple interpretar que se refiere al Tribunal de Apelación (*Court of Appeal*) que a uno que lo desconozca. Leer un texto en inglés siempre suscita alguna duda de vocabulario que, en la mayoría de las veces, se puede solucionar o deducir por el contexto. Esto no sucede en los textos de una temática tan específica como la jurídica. La diferencia sutil entre términos como *manslaughter* y *murder* se puede escapar al lector y generar un error grave al asimilar el texto y traducirlo. Lo mismo ocurre con términos como los nombres de los tribunales: a pesar de que algunos pueden resultar familiares (como el Supremo) por su cercanía con los nuestros, otros son algo alejado y exclusivo (como el Tribunal de la Corona) y ello puede hacer que el lector se pierda.

Así pues, puedo concluir que he cumplido el objetivo de mi trabajo, que era demostrar la importancia de la documentación dentro del mundo de la jurídica ya no sólo limitada a la terminología sino también a cuestiones más abstractas y teóricas dentro del marco que forma el contexto. En ramas de la traducción como la literaria es evidente el efecto y la importancia de conocer el contexto sobre el que se está trabajando, sin embargo se asume erróneamente que, en disciplinas como la jurídica, lo más importante es la terminología. En este caso, puedo afirmar que, a pesar de que la ayuda del contexto es más sutil, conocer cómo funciona el sistema del que se traduce facilita la tarea y ayuda a que el texto sea mucho más comprensible para el lector final. No basta con consultar el diccionario: es necesario saber de qué trata un texto en profundidad para poder traducirlo bien.

## Bibliografía y webgrafía

- ALCARAZ VARÓ, E. *El inglés jurídico*. Barcelona: Ariel Derecho, 1994
- Boletín Oficial del Estado. Recuperado desde: [www.boe.es](http://www.boe.es) [última consulta: 12 de febrero de 2015 ]
- Buscador de jurisprudencia del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp> [última consulta: 25 de mayo de 2015]
- Cervilla, P. (2014, 10 de julio). "Último paso para que Don Juan Carlos sea aforado". ABC. Recuperado desde: [www.abc.es/espana/20140710/abci-ultimo-paso-para-juan-201407091940.html](http://www.abc.es/espana/20140710/abci-ultimo-paso-para-juan-201407091940.html) [última consulta: 12 de febrero de 2015 ]
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J.M. *Diccionario jurídico 2012*. Madrid: Aranzadi, 2012
- Enciclopedia jurídica de la UNED. Disponible en: <http://www.uned-derecho.com/diccionario/> [última consulta: 26 de marzo de 2015]
- Enciclopedia jurídica online. Disponible en: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/inicio-encyclopedia-diccionario-juridico.html> [última consulta: 25 de mayo de 2015 ]
- Gómez Colomer, J.L. (2014, 4 de Abril) "¿Qué es un aforado y cuántos hay en España?". *Europa Press*. Recuperado desde: [www.europapress.es/nacional/noticia-aforado-cuantos-hay-espana-20140404190123.html](http://www.europapress.es/nacional/noticia-aforado-cuantos-hay-espana-20140404190123.html) [última consulta: 12 de febrero de 2015 ]
- Linguee. Diccionario y corpus bilingüe. Disponible en <http://www.linguee.es/> [última consulta: 25 de mayo de 2015 ]
- Ministerio de Justicia de España: *Descripción del sistema judicial español* (Noviembre 2003). [última consulta: 12 de febrero de 2015 ]
- Página web del Gobierno Inglés sobre el sistema judicial. Disponible en: <https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/court-structure/> [última consulta: 22 de marzo de 2015 ]
- Página web del Ministerio de Justicia de España. Disponible en: [www.mjusticia.gob.es](http://www.mjusticia.gob.es) [última consulta: 12 de febrero de 2015 ]
- Página web del Ministerio Fiscal. Disponible en: [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es) [última consulta: 12 de febrero de 2015 ]
- Página web del *Sentencing Council*. Disponible en: <https://www.sentencingcouncil.org.uk/> [última consulta: 25 de mayo de 2015 ]
- *The Free Dictionary (Legal)*. Diccionario monolingüe disponible en: <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/> [última consulta: 25 de mayo de 2015 ]
- *The Incorporated Council of Law Reporting*. Disponible en: <http://www.iclr.co.uk/> [última consulta: 25 de mayo de 2015 ]
- Wordreference. Diccionario bilingüe y monolingüe online. Disponible en: <http://www.wordreference.com/> [última consulta: 25 de mayo de 2015 ]

## Anexos

### Original del texto traducido

Regina v Appleby

Regina v Bryan and another

Regina v Cowles and another

[2009] EWCA Crim 2693; [2009] WLR (D) 373

CA: Lord Judge CJ, Thomas, Hughes LJ, Simon, Royce JJ: 18 December 2009

As a result of recent changes in legislative structures, crimes which resulted in death should be treated more seriously than before when sentencing the offender so that, even where the conviction was for manslaughter rather than murder, there should be an increased focus on the fact that a victim had died in consequence of an unlawful act of violence

The Court of Appeal (Criminal Division) so held when (i) granting the Attorney General leave under section 36 of the Criminal Justice Act 1988 to refer to the court as unduly lenient the sentence imposed on 3 July 2009 in the Crown Court at Teesside (Judge Peter Fox QC) on Declan Paul Appleby, on his conviction of murder, of detention at Her Majesty's pleasure with a minimum specified period of six years, and increasing that minimum period to nine years; (ii) granting leave the Attorney General under section 36 of the 1988 Act to refer to the court as unduly lenient sentences imposed on 3 July 2009 in the Crown Court at Mold (Davis J) on Thomas Bryan, on his plea of guilty to manslaughter, and on Peter Jason Roberts, on his conviction of manslaughter of three years' and 18 months' imprisonment respectively and increasing those sentences to five years' and three and a half years' imprisonment respectively ; and (iii) dismissing the appeals of Ben Kevin Cowles and Tom Andrew Cowles against sentences imposed on 26 June 2009 by Saunders J in the Crown Court at Norwich on their pleas of guilty to offences of assault occasioning actual bodily harm, affray and manslaughter of seven and a half years' and seven years' imprisonment in total respectively.

LORD JUDGE CJ said, in the reserved judgment of the court, that a significant aggravating feature of these cases of manslaughter was the fact that they involved gratuitous, unprovoked violence in the streets, of the kind which seriously discouraged law-abiding citizens from walking their streets, particularly at night. These cases provided the court with an opportunity to reconsider the approach to sentencing in cases of manslaughter when, notwithstanding that the defendant intended neither to kill nor to cause the deceased grievous bodily harm, he was convicted of manslaughter on the basis that the death was consequent on an act of unlawful violence. If a defendant was convicted of manslaughter the consequences had to be treated as if they were unintentional and unintended. The question to be addressed was the impact of recent criminal justice legislation. Section 143(1) of the Criminal Justice Act 2003 focused significant importance in the sentencing process on the consequences of every offence. This was a new statutory provision which expressly required that both the offender's culpability and the consequences, actual or potential, intended or foreseen of the crime should be expressly addressed in the sentencing decision. In manslaughter culpability might be relatively

low, but the harm caused was always at the highest level. The further effect of the Criminal Justice Act 2003 had been to increase the punitive element in the sentence for murder. Neither the Sentencing Guideline Council's definitive guidelines in relation to sentences for manslaughter on the grounds of provocation nor those in relation to attempted murder was directly analogous, nor were the considerations identified in relation to diminished responsibility manslaughter in *R v Wood (No 2)* [2009] EWCA Crim 651; [2009] WLR(D) 125, nor those applicable to deaths on the road. However, taken altogether the recent changes in the legislative structures led to the inevitable conclusion that crimes which resulted in death should be treated more seriously, not so as to equate the sentencing in unlawful act manslaughter with the sentence levels suggested for murder in Sch 21 to the 2003 Act, but so as to ensure that the increased focus on the fact that a victim had died in consequence of an unlawful act of violence, even where the conviction was for manslaughter, should, in accordance with the legislative intention, be given greater weight.

Appearances: Timothy Roberts QC and Robin Duffy (assigned by the Registrar of Criminal Appeals) for Appleby; Duncan Bould (assigned by the Registrar of Criminal Appeals) for Bryan; Jonathan Duffy (assigned by the Registrar of Criminal Appeals) for Roberts; Andrew Edis QC (instructed by the Treasury Solicitor) for the Attorney General; Graham Parkins QC (assigned by the Registrar of Criminal Appeals) for Ben Cowles; Michael Hubbard QC (assigned by the Registrar of Criminal Appeals) for Tom Cowles; Mark Dennis QC (instructed by the Crown Prosecution Service) for the Crown.

Reported by: Clare Barsby, barrister.

- Texto recuperado desde *The Incorporated Council of Law Reporting*. Disponible en: <http://www.iclr.co.uk/>